

COLOMBIA: LA RENUNCIA DEL EMBAJADOR COLOMBIANO NO DEBE CEGAR A LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA PERSISTENCIA DE LOS ABUSOS PARAMILITARES

Amnistía Internacional ha manifestado hoy que la Unión Europea - que en una reciente resolución había manifestado su inquietud por la situación de los derechos humanos en que se encontraban 280 familias desalojadas a la fuerza - no debe utilizar el anuncio de que el embajador Colombiano ha renunciado a su cargo para olvidarse de que persisten los abusos paramilitares.

La renuncia de Carlos Arturo Marulanda Ramírez como embajador de Colombia para Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea se ha producido tras las denuncias de su implicación, entre los meses de febrero y marzo de este año, en el desalojo forzado de 280 familias campesinas de unas tierras situadas en el Rancho de Bellacruz de las que él es parcialmente propietario.

Amnistía Internacional ha afirmado: «La renuncia de Marulanda no debe ser excusa para que deje de prestarse atención internacional a la grave situación en que se encuentran las familias que han sido desalojadas a la fuerza. Nuestra organización teme que, con la renuncia de Marulanda, cesen las presiones internacionales para que se adopten medidas y se dé por concluido el seguimiento pormenorizado de la situación en Bellacruz por parte de la Unión Europea.»

El desalojo de los campesinos lo llevó a cabo en el norte de Colombia un grupo paramilitar que actúa en el rancho y en las áreas colindantes con el apoyo de las fuerzas armadas colombianas tras la pérdida, por parte de *Marulanda Ramírez Ltd.* -la empresa que representa los intereses del señor Marulanda-, del recurso con el que éste reclamaba parte de las tierras ocupadas por los campesinos.

En el desalojo se incendiaron las viviendas de los campesinos y a muchas de las familias las torturaron y amenazaron de muerte si se atrevían a regresar al lugar. Posteriormente, varios de los campesinos desalojados y otras personas que trataban de ayudarlos han resultado muertas, han «desaparecido» o han sido objeto de nuevas amenazas de muerte.

Para Amnistía Internacional: «La renuncia de Marulanda Ramírez no cambia en modo alguno lo sucedido y no va a servir para que cesen las atrocidades que cometen contra los campesinos desalojados los paramilitares que cuentan con el apoyo del ejército. La renuncia no debe considerarse como la conclusión del problema.»

De hecho, y desde que se ejecutaron los desalojos, se ha dado muerte o han «desaparecido» al menos 13 personas, y 280 familias siguen desamparadas y amenazadas. Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a que garantice el regreso seguro o el realojo de esas familias, a que se asegure de que a los responsables de las muertes se los procesa, y a que acabe con la violencia paramilitar en esa región del país.

El Fiscal General de Colombia ha cursado al menos 25 órdenes de arresto contra líderes paramilitares que actúan en el Rancho de Bellacruz. Sin embargo, y aunque no cabe sorprenderse por ello, las autoridades militares y policiales no han adoptado medida alguna para capturarlos y siguen permitiendo que esos grupos paramilitares continúen actuando libremente en la zona.

Amnistía Internacional ha dicho: «La crisis de Bellacruz está muy lejos de haberse resuelto. Las familias desplazadas y quienes las apoyaron siguen en peligro de ser objeto de violación de sus derechos humanos. La Unión Europea debe seguir vigilando el caso estrechamente y exigiendo el arresto inmediato de los líderes paramilitares contra quienes se han cursado órdenes de arresto».

Amnistía Internacional ha formulado también un llamamiento a la Unión Europea para que insista en que se procese a todo implicado en los abusos y para que se adopten las medidas oportunas que garanticen la seguridad de los afectados.

INFORMACIÓN GENERAL

Conforme a los acuerdos firmados con los campesinos, las autoridades colombianas se comprometieron a garantizar a las familias desalojadas un regreso seguro o su reasentamiento, a dismantelar a los grupos paramilitares que actúan en el rancho y a procesar a los responsables de los abusos. Estos acuerdos no se han cumplido y hoy continúan las amenazas de muerte, los desalojos y los homicidios.

Con el fin de presionar a las autoridades colombianas para que cumplan sus compromisos, algunas de las familias desplazadas llevan ocupando pacíficamente desde el 5 de agosto la sede del Instituto Agrario Colombiano (INCORA) y del Defensor de los Derechos Humanos en Bogotá. Según los informes que ha recibido Amnistía Internacional, las condiciones inhumanas en que se encuentran estas familias ya han ocasionado graves enfermedades entre sus niños. A algunas de esas familias se las ha alojado en el Hogar del Campesino de Pelaya, donde son constante objeto de las amenazas y hostigamiento de los paramilitares a pesar de que se les había prometido una protección policial permanente.

FIN\